

de Julio de 1874.—*Lic. Luis I. Gomez.*—
Do asistencia.—*José María Gonzalez.*—
Vicente Simancas.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de
Justicia.*

México, Julio 23 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el C. Manuel Oliver en representación de D. Nicolas Lopez, D. Jose Casaurane, D. Guillermo R. Dick, D. Ricardo U. Leeteh, D. Federico Taynton y de las casas representadas por D. José M. Maldonado gerente de la casa de comercio que gira bajo la razon social "Isaac Maldonado y C^{ta}" y D. Constantino Maldonado á nombre de la que gira bajo la razon Duplan y Maldonado del comercio de Minatitlan, contra el impuesto de doce y medio centavos que les cobra el Ayuntamiento de Minatitlan por cada una de las toneladas que miden los buques conductores de maderas, fundando su solicitud en que por el cobro de este impuesto se invade la esfera de la autoridad federal, violando la fraccion 1^a del artículo 112 de la Constitucion federal, que prohibe á los Estados imponer contribuciones ó derechos sobre impuestos ó exportaciones; visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; la sentencia del Juez de Distrito.

Considerando: que está demostrado en autos que el impuesto municipal, contra el cual se solicita el amparo, recae sobre frutos nacionales que van á exportarse, es decir sobre maderas que desde su corte estan destinadas á ser exportadas.

Que el procedimiento de la autoridad municipal que gradúa el impuesto por el número de toneladas que miden los buques exportadores, seria un indicio suficiente para demostrar que se trata de exportaciones que solo pueden ser grabadas por los Estados con permiso del Congreso de la Union.

Con fundamento de los artículos 101 y

TOMO VI.—PARTE II.

102 de la Constitucion federal, se declara que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito que amparó á las personas arriba mencionadas.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 5 de 1874.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por el C. Lic. Trinidad Gonzalez Doria en representación de José M. Guerra y Romualdo Salinas, contra la pena de muerte á que fueron condenados por el Alcalde 1^o de la Villa de Marin, Estado de Nuevo Leon, en la causa que les formó por el delito de homicidio.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que mandada suspender por el Juzgado la ejecución de la sentencia que con fecha 15 del próximo pasado Febrero, pronunció el C. Alcalde 1^o de la Villa de Marin, contra José María Guerra y Romualdo Salinas condenándolos como saltadores, á la última pena, con arreglo á la ley de 2 de Mayo de 1873, ha continuado el recurso de amparo interpues-

to por el defensor de los reos, y habiéndose ya recibido el informe con justificación, que previene el art. 9º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, al que suscribe toca ya emitir su juicio acerca del particular.

El defensor invoca para sus representados, el amparo y protección de la Justicia federal, por creer que se violan las garantías que á todo hombre otorga la Carta fundamental de la República, en sus arts. 13 y 23, al ser juzgados aquellos como salteadores y como tales condenados á la pena de muerte. La gracia de indulto que los quejosos solicitaron ante la H. Legislatura del Estado, les fué denegada, y es por lo mismo indudable que del fallo definitivo en este juicio que han promovido como último recurso, depende la conservación ó pérdida irremisible de la existencia de aquéllos infelices, razón porque el que suscribe se propone examinar escrupulosamente y sobre todo, con la calma y reflexión que la gravedad del asunto exige, si en efecto se han violado como se asegura, las garantías á que se refiere el escrito del defensor, á fin de procurar así el mayor acierto, sin perder de vista que nuestra Constitución política, en su primer artículo reconoce: que los derechos del hombre son la base y objeto de las instituciones sociales; y declara, que todas las leyes y todas las autoridades de la República, están en la obligación de respetar y sostener las garantías que ella otorga.

La primera cuestión que á juicio del que suscribe debe en el caso resolverse, es la siguiente: ¿los encausados José María Guerra y Romualdo Salinas, deben reputarse legalmente como salteadores?

Los mas respetables prácticos Criminalistas y entre ellos Escribhe en su Diccionario de Legislación, definen al salteador diciendo: que es *el que sale á los caminos y roba á los pasajeros*; así es que, para resolver la cuestión propuesta, debemos investigar si Salinas y Guerra salieron al camino y robaron á alguien, ó bien si en la comi-

sión del hecho que dió margen á la causa instruida contra ellos, faltó por su voluntad alguna de las dos circunstancias enunciadas ó ambas, pues entonces no podía decirse propia y legalmente que eran salteadores.

Entre los justificantes que remitió el C. Alcalde 1º de Marín, juntamente con su informe, se ve la declaración del C. americano Alejandro Sanders, que como rendida en la forma legal, *in articulo mortis* y por referirse á un delito por su naturaleza de difícil prueba, debe conforme á derecho obrar gravemente en contra de los indiciados, y en ella consta que yendo el mencionado Sanders acompañado de su sirviente Alejandro Stafut, por el camino que conduce de Marín á Cerralvo el 17 del último Diciembre, como á las once de la mañana, se encontró en un punto llamado "Pinaja" con ocho ó diez hombres armados y montados todos, quienes diciéndose empleados del Gobierno le exigían que mostrara lo que conducía en su carriaje, y después de manifestarles los documentos que cubrían una suma de dinero y unos cortes de casimir, le recogieron los documentos, desarmando tanto á él como á su criado y los obligaron á rendirse, amenazándoles con las armas preparadas hacia el pecho, después de que los ataron fuertemente de los brazos y guiando uno de ellos el carruaje, lo condujeron para dentro del monte; dice además Sanders que comprendiendo por todo esto, que aquellos individuos obraban de mala fé, y recordando que en uno de los asientos del carruaje había quedado una pistola, logró desatarse y cogiéndola con ella les hizo fuego, consiguiendo ponerlos en fuga después de haber recibido él un balazo, continuando su marcha en seguida para llegar al rancho de "Pruncda" donde se le recibió esta declaración y en donde murió á las pocas horas á consecuencia del balazo, según consta también de este expediente.

A lo declarado por Sanders, hay que agregar otro hecho, que justificado ya por las constancias que obran en este expedien-

te, es de gran importancia en la cuestion que se está tratando, y sirviendo de poderoso aditamento á la declaracion de Sanders, forma con ella una prueba tan robusta y completa, como por derecho se requiere. Este hecho consiste en el hallazgo en poder de Salinas y Guerra de una carabina, una pistola y un sombrero de la propiedad del finado Sanders, y constituye por sí solo una presuncion de derecho en cuanto á los autores del delito, presuncion que como se acaba de indicar, unida la declaracion de Sanders, forma con ella una prueba plena.

Todo esto está demostrando que los quejosos salieron al camino de la hacienda de Ramos donde viven, á robar, y efectivamente robaron al extrangero Sanders, hiriéndolo mortalmente en el acto de cometer el delito, y están por lo mismo comprendidos en la definicion legal de saltadores, quedando en consecuencia resuelta la cuestion de que nos venimos ocupando.

Siendo esto así, no puede caber la menor duda de que la garantía consignada en el art. 23 de la Constitucion no ha sido violada como lo asegura el defensor de los reos, puesto que ese mismo artículo dejó subsistente la pena de muerte para el saltador de caminos, y de aquí facilmente se colige que tampoco se violó la del art. 13, al ser juzgados y sentenciados con arreglo á la ley de 2 de Mayo de 1873. La razon es muy sencilla: esta ley ha sido promulgada por el Soberano Congreso de la Union y sancionada por el Presidente, con el loable fin de purgar á la sociedad del bandalismo que cada dia se desarrollaba tomando mayores proporciones; de conformidad en un todo con lo que previene el art. 29 de la misma Constitucion, puesto que entre los casos en que dicho artículo permite la suspension de garantías, es indudable que está comprendido el asalto, que no puede menos de poner en grave peligro ó conflicto á la Nacion, como que amenaza de muerte su paz y tranquilidad.

Por otra parte, la citada ley de 2 de Ma-

yo no puede decirse que sea una ley privativa ni que establezca tribunales especiales, porque no ha sido dada para juzgar á determinadas personas, ni ha tenido por objeto crear ni establecer fuero alguno, ni privilegio en favor de nadie; sus disposiciones comprenden á todo aquel que cometa los delitos que menciona, sin distincion de clases ó condiciones, y su ejecucion la encomienda á cualquier gefe de fuerza aprehensora ó á la autoridad cuyos agentes hayan hecho la aprehension.

Hay mas, la ley de 2 de Mayo promulgada con todos los requisitos constitucionales, suspendió la garantía que otorga la primera parte del art. 13 ya citado para los saltadores; estando demostrado que los quejosos son los saltadores, desde luego se ve que no gozan de aquella garantía, y por lo mismo, mal pueden decir que se les ha violado.

El defensor en el curso de su escrito, indica que carecía de jurisdiccion el C. Alcalde 1º de Marin, toda vez que dejó transcurrir el término fijado por la ley citada, para concluir la averiguacion y por haber tenido conocimiento de ella el Juez ordinario; mas como en su escrito no se dijo expresamente que habia sido violada otra garantía que no fuera de las consignadas en los arts. 13 y 23 que cito, el Promotor cree que no debe ocuparse sino de lo relativo á las violaciones reclamadas; sin embargo, y por lo que pueda importar, hace presente que el lapso de termino no puede constituir falta de jurisdiccion y solo importaria un caso de responsabilidad, sin que por la circunstancia de haberse llevado la causa ante los Tribunales ordinarios deba legalmente considerarse sin jurisdiccion á la autoridad política, cuando aquellos se declararon incompetentes, despues de practicadas las diligencias de mayor urgencia y que no admitan demora.

Con lo espuesto cree el Promotor haber demostrado que no hubo violacion de las garantías consignadas en los arts. 13 y 23 de

la Constitución política de la República, al ser juzgados y sentenciados los quejosos con arreglo á la ley de 2 de Mayo de 1873, y por lo mismo y á reserva de rectificar su juicio, con vista de las pruebas que se rindan en tiempo oportuno, tiene la pena de sugetar á la ilustración del juzgado, la siguiente proposición, que aprobará ó no según lo creyere mas conveniente y justo:

La Justicia de la Union no ampara ni protege á los reos José María Guerra y Romualdo Salinas, contra la sentencia del C. Alcalde 1º de Marina que los condenó á sufrir la última pena.

Monterey, Mayo 3 de 1874.—*Lic. S. Quel.*

Es copia que certifico. Saltillo, Mayo 20 de 1874. Damos fé.—*Lic. Mariano Sanchez Peña.*—*A.*—*Antonio D. Treviño.*—*A.*—*Bernardo Lareto.*

Pedimento del C. Promotor fiscal del Juzgado de Distrito.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal de este Juzgado en el juicio de amparo promovido por los reos José María Guerra y Romualdo Salinas, ante el Juzgado de Distrito de Monterey, con motivo de haber sido juzgados como salteadores y condenados á la pena de muerte por la autoridad política de la Villa de Marina, y cuyo juicio por impedimento del Juez propietario y suplente, está sometido al conocimiento de este Juzgado, conforme al acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de fecha 6 de Julio de 1872; supuesto su estado que es el de alegar de buena prueba, en vista de las presentadas en tiempo hábil por el Ministerio fiscal, el que lleva la voz, cumpliendo con su deber pide al Juzgado se sirva declarar que no procede el amparo que se solicita, por estar probado el asalto, según lo demuestra el Promotor del Juzgado de Distrito de Monterey, en su pedimento de 3 de Marzo de este año (fojas

23 cuaderno principal) y por estar suspendas para los que cometen este delito, las garantías constitucionales que se invocan en la solicitud de amparo.

Las constancias que obran en la causa, producen tristemente un convencimiento perfecto de que los expresados reos han perpetrado un verdadero asalto en despoblado y á mano armada, del que resultó la muerte del C. americano Alejandro Sanders.

Consta que el hecho se consumió en despoblado; sobre este punto existe una absoluta conformidad en las pruebas presentadas por el defensor de los reos y por el Promotor fiscal del Juzgado de Distrito de Monterey.

Consta (en el oficio de foja 19 vuelta de la copia presentada por el defensor, y en las declaraciones de los reos fojas 5 y 7), que los asaltantes no son celadores sino *auxiliares* del contrabando, empleo desconocido y que no tiene dotación ninguna asignada en la planta de 30 de Mayo de 1870, y que como es público y notorio no tiene otra remuneración que las utilidades de los denunciados en caso de contrabando.

Consta tambien (fojas 19, 5 y 7 citadas) que el que hacia de jefe de la expedición, no tenía otro empleo que el de auxiliar como los que lo acompañaron.

No recibieron orden del comandante del contrabando para vigilar á Sanders (citado oficio de foja 19 y declaración del celador C. Urbano Guiza).

Aun cuando hubiesen sido nombrados en comisión de vigilancia, (que no lo fueron) conforme al capítulo 5 del Reglamento del contrabando, no tuvieron facultad para *detener ni molestar á los pasajeros*, sino únicamente para conducirlos al punto mas inmediato y esto solamente en caso que no los hubiesen mostrado los documentos respectivos, y de haber tenido motivos fundados de sospecha. Lejos de limitarse á esto, se negaron á ir á la inmediata población en compañía de Sanders como éste les propuso, á fin de que examinaran su carruaje y

el dinero que conducía. (Declaración de Sanders y de su sirviente Stafat, confirmadas en este punto por la de los reos.)

Recojieron á Sanders las guías ó documentos que protegían al dinero que llevaba, y no los han devuelto ni á la autoridad, ni á sus inmediatos superiores, (cit. declaraciones y oficio del Comandante, de fojas 46 vuelta.) Fueron los primeros en usar de la violencia (declaración de Juan Treviño foja 28 vuelta, que confirma de un modo indirecto lo referido sobre este punto por Sanders y Stafat.)

No se presentaron voluntariamente á la autoridad para darle conocimiento del suceso, sino que hubo necesidad de dictar las respectivas órdenes de aprehensión, y á pesar de ellas permanecen ocultos y prófugos los demás cómplices. (Oficio de foja 19, orden de aprehensión de foja 16 y diligencia de fojas 15 puesta con fecha 19 de Diciembre, siendo de notar, que el día 17 se verificó el delito.)

Fueron hallados en su poder una carabina, una pistola y el sombrero de Sanders, prendas que no devolvieron espontáneamente y cuya tenencia no ha sido explicada de un modo satisfactorio. (Oficio de foja 19 y ampliaciones de las declaraciones de los reos.)

Condujeron el carruaje fuera del camino y lo internaron al monte; (declaraciones de Sanders y Stafat, plenamente confirmadas en este punto, por el reconocimiento del terreno hecho por los peritos, Dionisio González, Juan Gómez y Reduendo Pruneda, fojas 8, 9 y 10, y además por las declaraciones de Antonio Lozano, Miguel Montemayor y Plaquinto González, que acompañaron al Juez local de Ramos, en el reconocimiento del terreno fojas 16 y 17.)

Las descargas de las armas tuvieron lugar dentro del monte, según lo acreditan el desorden de las pisadas de los caballos, la irregularidad de las huellas del carruaje, y sobre todo, el charco de sangre y los casquillos descargados que encontró el citado

Juez de Ramos, en compañía de los testigos referidos (fojas citadas.)

Todos estos hechos obligan á considerar á los citados reos comprendidos en el artículo 89 de la ley de 3 de Mayo de 1873, que dice: "Para los efectos de esta ley, se entienden por salteadores, los que en los caminos ó en los lugares despoblados, asaltan á los individuos con violencia, llevando el objeto de robarlos, herirlos ó matarlos."

No se puede creer que no hubo intención dañada; porque los hechos referidos indican lo contrario, y en derecho, la intención se deduce de aquellos.

Además de esto, no pertenece á ese Juzgado calificar si la intención de robar está suficientemente probada, porque la fuerza probatoria de las constancias enumeradas, solamente el Juez del delito puede calificarla. "El examen circunstanciado de la mayor ó menor plenitud de las pruebas, es de su exclusiva competencia (núm. 63. del "periódico de Legislación, "El Foro, tomo 29 art. Jurisprudencia Federal."

En el presente juicio no es de determinar-se la eficacia de aquellas pruebas; por que esa apreciación ya se hizo por una autoridad competente, cuyos actos no están sujetos á la revisión de este Juzgado.

Y supuesto que según las constancias referidas de la causa, el delito de asalto está probado suficientemente á juicio de la autoridad competente, estando suspensas para los que cometan este delito, (ley de 3 de Mayo de 1873) las garantías reclamadas por los citados reos, se infiere irremisiblemente, que no procede el recurso de amparo que estos han promovido.

Por todo lo expuesto, el que lleva la voz concluye pidiendo al Juzgado, que de conformidad con el pedimento del O. Promotor fiscal del Juzgado de Distrito de Monterrey, se sirva declarar: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á los reos José María Guerra y Romualdo Salinas contra la sentencia que los condenó á sufrir la pena capital, por el delito de asalto en despobla-

do que perpetraron.—Saltillo, Abril 12 de 1874.—*E. Moreasillas*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Saltillo, 20 de Mayo de 1874.—*Lic. Mariano Sanchez Peña*.—*A.*—*Francisco García Sepúlveda*.—*A.*—*Bernardo Laredo*.

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Saltillo, 20 de Mayo de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon por el C. Lic. Trinidad Gonzalez Doria, como defensor de los reos José María Guerra y Remualdo Salinas, contra las providencias del C. Alcalde 1º constitucional de la Villa de Marina del mismo Estado, en virtud de la cual fueron condenados los expresados reos á la pena capital conforme á la ley de 3 de Mayo de 1873 sobre saltadores y plagarios, por haber infringido con tal providencia las garantías que les otorga á sus defensores, los artículos 13 y 23 de la Constitucion general de la República; los informes producidos por la misma autoridad; el pelimento del C. Promotor fiscal de aquel Juzgado, en que se pide se niegue el recurso de amparo á los expresados reos por estar comprendidos en la referida ley de saltadores y plagarios, probado el delito de asalto y juzgados por autoridad competente; el auto de 11 de Marzo del presente año, en el que á virtud de haber sido recusados el personal de aquel Juzgado y no haber mas suplentes que se encargasen del conocimiento de éste juicio, se remitió á este por mas inmediato, de conformidad con la circular de la Suprema Corte de Justicia de 6 de Julio de 1872; las pruebas rendidas por el C. Promotor y por el defensor de los reos, por último, el alegato que con vista de unas y otras pruebas ha presentado el C. Promotor fiscal de éste Juzgado, en el que pide se niegue el recurso interpuesto, y todo lo demas que de autos consta y ver convino.

Considerando: que segun lo declarado por

la Suprema Corte de Justicia en su ejecutoria de 8 de Enero del corriente año, *el crimen circunstaciado de la mayor ó menor plenitud de las pruebas, es de la exclusiva competencia del juez que conoce del delito que se persigue*; que en el presente caso no es otro que el alcalde 1º constitucional de la Villa de Marina, que juzgó y sentenció á la última pena á los mencionados Guerra y Salinas, despues de haber hecho la apreciacion legal de las que existen en el proceso, en pro y en contra de los mencionados reos.

Considerando: que por las constancias que obran en el referido proceso, resulta del mostrado que los procesados Guerra y Salinas en union de Pablo Gonzalez, Ireneo y Alejandro Benavides, Felix Salinas y Luis Gonzalez, auxiliares del contrarresguardo de la Frontera del Norte, fueron los autores del delito de asalto en despojado de que se ha hecho cargo á los referidos Guerra y Salinas, y del cual resultó la muerte del extranjero Alejandro Sánders.

Que por consecuencia, no tiene aplicacion alguna el artículo 23 de la Constitucion general de la República que se cita por el defensor de los expresados reos, con el objeto de que no se imponga á sus defensores la pena de muerte á que han sido condenados como saltadores, pues precisamente este artículo la permite contra el traidor á la patria, el saltador de caminos, el parricida, el incendiario, y el homicida con alevosía, premeditacion y ventaja.

Que por el artículo 1º de la ley de 2 de Mayo de 1873, estan suspensas para los saltadores las garantías de que habla la 1ª parte del artículo 13 de la Constitucion federal, que se cree violada por el citado defensor de los procesados.

Con fundamento pues en las anteriores consideraciones y en los artículos 101 y 102 del Código fundamental de la Nacion, y de conformidad con lo pedido por los CC. Promotores, tanto de este Juzgado como del de Distrito de Nuevo Leon, el Juzgado de

Distrito de Coahuila fallando en este asunto definitivamente, conforme con la circular de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion de 6 de Julio de 1872, decretar: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á José María Guerra y á Romualdo Salinas, contra la sentencia del Alcalde 1º constitucional de la Villa de Marin, que los condenó á la pena capital por el delito de asalto cometido en el punto de "Tinajas," del cual resultó la muerte del extrangero asaltado Alejandro Sándres. Notifíquese esta sentencia, sáquense las copias respectivas para su publicacion en el Organó Oficial de esta Ciudad y periódico Oficial de Nuevo Leon, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos legales. Así lo decretó, mandó y firmó el C. Juez de Distrito del Estado, actuando con testigos de asistencia. Damos fé.—*Lic. Mariano Sanchez Peña.*—A.—*Francisco Garza Sepúlveda.*—A.—*Antonio D. Treviño.*

Es copia que certifico. Saltillo, Mayo 27 de 1874.—*Lic. Mariano Sanchez Peña.*—A.—*Bernardo Laredo.*—A.—*Antonio D. Treviño.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 27 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Trinidad Gonzalez Doria en representacion de sus defensos José María Guerra y Romualdo Salinas, contra la pena de muerte á que fueron condenados por el Alcalde 1º de la Villa de Marin, Estado de Nuevo Leon, en la causa que les formó por el homicidio del C. americano Alejandro Sándres, juzgándolos con arreglo á la ley de salteadores y plagiarios, con cuyos procedimientos reputa violadas el promovente, en las personas de sus representados, las garantías que reconoce la Carta fundamental de la República

en sus artículos 12 y 23: visto el informe del mismo C. Alcalde haciendo referencia á algunas constancias de la causa; la copia de toda ella presentada como prueba por el C. Gonzalez Doria; los pedimentos de los CC. Promotores de los Juzgados de Distrito de los Estados de Nuevo Leon y de Coahuila; la sentencia del Juez de este último Estado á quien pasó por recusacion del personal del primero, y todas las demas constancias del expediente, que se tuvieron presentes; y apareciendo de estas, que el carácter de gavilla que se le dá á la seccion de auxiliares del contraserguardo de la Frontera del Norte que salió á reconocer el carruaje del C. americano Alejandro Sándres y á la que pertenecian los CC. José María Guerra y Romualdo Salinas, es indebida, por razon de que en el mismo caso se podría aplicar esta denominacion á todas las demas secciones que reunidas practican reconocimientos á todo vehículo que transita por los caminos públicos: que de la misma manera se debe considerar el carácter de salteadores que se da á los individuos que salieron al punto llamado "Las Tinajas" el 17 de Diciembre último á reconocer el carruaje antes mencionado, pues aparece probado, que en el mismo acto presentó el Gefe de la seccion al Sr. Sanders los documentos que lo autorizaban para inspeccionar los objetos de que él era portador á fin de cerciorarse si caminaban con los requisitos legales: que las presunciones que hay en contra de los encausados están contrariadas por la prueba que rindió el C. Defensor; y considerando: que de todas las diligencias practicadas en la causa, no aparece probado que hubiese el delito de asalto y robo, y por lo mismo no existe una de las condiciones para que pudiera conocerse de tal delito conforme á la ley de plagiarios; que por consiguiente, tampoco puede aparecer que los referidos Guerra y Salinas en union de los demas individuos que los acompañaban, hayan cometido este delito de que se les acusa, y por lo mismo se deben depurar los he-

chos que tuvieron lugar en un juicio que no tenga la premura de ésta ley.

Por estas consideraciones y con fundamento de los artículos 18, 101 y 102 constitucionales, se decretar: que es de revocarse y se revoca la sentencia del inferior, que negó el amparo á los CC. José María Guerra y Romualdo Salinas, contra la pena de muerte á que los condenó el C. Alcalde 1º de la Villa de Marín, y se declara: 1º que la Justicia de la Union ampara y protege á los mencionados CC. contra los actos de que se quejan, 2º consígnense á los quejosos á la autoridad competente:

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen acompañándole testimonio de ésta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*Miguel Auza.*—*José Arteaga.*—*José María Lozano.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio Ramírez.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 25 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

DILIGENCIAS

Practicadas con motivo del acuerdo de 10 de Julio último del Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia, que suspendió al Juez de Distrito de Sinaloa Lic. Pedro S. Bermudez del ejercicio de sus funciones.

Pedimento del C. Promotor fiscal del Tribunal de Circuito.

C. Magistrado.

El Promotor fiscal dice: ha examinado con detenimiento tanto los cargos que se hacen al C. Juez de Distrito de Sinaloa por sus procedimientos respecto de las reclamaciones hechas contra México por varios Americanos, y principalmente las relativas á la mina llamada "Santa Barbara" de la compañía la "Cordillera," y la de Teheophilus Taliaferro; así como el informe justificado del referido Juez de Distrito, y encuentra: que en su concepto no ha incurrido en responsabilidad; y si bien es cierto que sus procedimientos no han dado un resultado favorable á los intereses de México por lo que hace á las reclamaciones indicadas, esto no puede atribuirse á su poca aptitud ó á falta de diligencia y celo en el desempeño de sus deberes.

En efecto, C. Magistrado, que solo se haya examinado al Sr. Lice y no á su socio Vico, se explica perfectamente por la circunstancia de formar ambos una sociedad mercantil, y de que lo que uno declarara sería la expresión de lo que dijera el otro; y con tanta mas razón cuanto que como se manifiesta en la información relativa, si se examinó á Lice y no á Vico, fué por que el primero tenía conocimiento del asunto y el segundo no habia intervenido en él.

Que si el Sr. Rajo y Esquerri y D. Andres Lanceter, fueron examinados relativamente á la reclamación de la compañía la "Cordillera," sus dichos no pueden consi-